

ECUADOR

Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

DIRECTOR

Francisco Rhon Dávila
Director Ejecutivo CAAP

EDITOR

Fredy Rivera Vélez

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del **Centro Andino de Acción Popular CAAP**, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 30

ECUADOR: S/. 110.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 10

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 40.000

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173 B, Quito - Ecuador

Fax: (593-2) 568452

e-mail: Caap1@Caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

PORTADA

Magenta Diseño Gráfico

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazu Offset

ECUADOR DEBATE

47

Quito-Ecuador, agosto de 1999

PRESENTACIÓN / 3-4

COYUNTURA

Nacional: Se profundizan la recesión y la incertidumbre / 7-17

Marco Romero C.

Política: Los polos de la crisis: su racionalidad y horizonte / 19-34

Fernando Bustamante

Conflictividad Social: Marzo-Junio 1999 / 35-46

internacional: Peor crisis de la posguerra, aún podría profundizarse / 47-63

Wilma Salgado

Equipo Coyuntura "CAAP"

TEMA CENTRAL

La comunidad andina: entre la crisis y la falta de identidad / 65-90

Marco Romero

A 30 años del proceso: fortalecer la unidad andina / 91-98

Alan Fairlie Reinoso

Negociaciones comunidad Andina de naciones

y el mercado común del sur / 99-127

Rubén Flores

Grupo Andino-Mercosur: Una vía para la inserción creativa en el escenario internacional? / 129-141

Jorge Reinel Pulecio

La diferenciación nacional en el contexto de la Región Andina / 143-152

Heraclio Bonilla

La integración en América Latina: un sobrevuelo desde Europa / 155-164

Marc Rimez

ENTREVISTA

La vigencia del marxismo en la Antropología / 165-178

Entrevista a William Roseberry

PUBLICACIONES RECIBIDAS / 179-185

DEBATE AGRARIO

La gestión local de los Recursos Naturales / 187-215

Leonard Field

Lo que piden los agricultores y lo que pueden los gobiernos / 217-222

Polan Lacki

ANALISIS

Gobernabilidad o el regreso del pretorianismo / 223-246

César Montúfar

El imaginario democrático en el Ecuador / 247-269

Pablo Andrade

CRITICA BIBLIOGRAFICA

Filosofía Andina: estudio intercultural de la sabiduría andina / 271-279

José Juncosa

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Marzo-Junio 1999

La conflictividad social y política del tercer cuatrimestre del gobierno demócrata popular puede ser caracterizada a partir de dos grandes nudos problemáticos: en primer término, una polarización regional de la política (en la que el enfrentamiento entre Guayaquil y el Gobierno Central ha tomado muchas veces matices violentos) que ha agudizado, como nunca antes, el debate y la necesidad de viabilizar formas de descentralización y/o regionalización del Estado y la Nación; y, en segunda instancia, un frontal rechazo a la política estatal, sobre todo en lo relativo al manejo de la crisis bancaria, de parte de numerosos grupos sociales y partidos políticos de oposición.

En efecto, durante el período noviembre-febrero se ha registrado el mayor índice de conflictos en lo que va del período gubernamental de Mahuad. Se observa un aumento de su porcentaje, con respecto al cuatrimestre anterior, que representa una tasa de crecimiento del 39%. Cabe recordar que el período estu-

diado vio suceder -entre otros incidentes- el congelamiento de los depósitos bancarios, la deblacle del sistema bancario nacional, la crisis -que cobró un inesperado tinte regional- del Banco del Progreso, numerosas paralizaciones, huelgas y bloqueos del sector de la transportación, del sector salud, de los maestros, y algunas disputas paralizantes entre los principales poderes del Estado en torno de la puesta en funcionamiento de los instrumentos más idóneos para manejar la crisis fiscal.

No sorprende por ello que durante los meses de marzo y abril, y como efecto de la decisión gubernamental de congelar los depósitos bancarios -como medida preventiva para evitar una escalada alcista en el precio de la divisa norteamericana- hayan tenido lugar en Guayaquil dos grandes marchas en contra de las prácticas centralistas del régimen (esa era la principal acusación de los líderes de ambas protestas). La primera tuvo lugar el 22 de marzo y fue provocada por la decisión de Fernando Aspiazú de no abrir las puertas del Banco del Progreso. De

allí canalizó una reacción de marcados tintes regionalistas contra el gobierno central, al que acusó de responsable de la medida. La segunda, del 8 de abril, fue liderada por las Cámaras de la Producción -la marcha de "los crespones negros"- en contra de la posible aplicación de nuevos impuestos.

Número de Conflictos por Mes

Meses FECHA	Frecuencia	Porcentaje
Marzo	74	25.52
Abril	76	26.21
Mayo	73	25.17
Junio	67	23.10
Total	290	100.00%

Las observaciones anteriores dan luz para entender el ordenamiento de los principales actores sociales y políticos que han generado importantes niveles de conflictividad en el país. Así, en primer término cabe resaltar que los trabajadores y los sindicatos aparecen aún -tal como en el cuatrimestre anterior- como los principales opositores a la administración de Jamil Mahuad: sus acciones y postulados políticos han producido el 40% del total de conflictos registrados. En un segundo plano es conveniente llamar la atención sobre la actuación de los partidos políticos en la generación del 15% de los conflictos observados: al igual que en el período pasado, conservan un alto perfil en la producción de turbulencia social, he-

cho que habla a las claras de las malas y beligerantes relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo del Estado.

En otro nivel se ubican los conflictos generados por las reivindicaciones de los denominados "grupos locales" y las "organizaciones barriales" -en conjunto han sido protagonistas del 11% de la conflictividad registrada: ello hablaría a las claras de la reactivación de protestas populares y sobre todo de la forma en que la crisis económica, la peor en la reciente vida democrática del país, ha incidido en la cotidianidad de los grupos sociales y las comunidades de los más recónditos lugares del país. Se constata la profundidad de la crisis cuando la conflictividad social desborda los mecanismos institucionales fijados para su expresión y pasa a localizarse en los tejidos infinitesimales de la sociedad, en las esferas micro-políticas de la nación.

Cabría destacar, finalmente, la conservación de una tendencia ya expresada en el cuatrimestre anterior, a saber, la actuación política opositora y conflictiva de las cámaras de la producción y de los empresarios: en el intervalo estudiado han sido partícipes del 8% del total de conflictos registrados.

La vuelta a la "escena pública" de estudiantes, campesinos e indígenas, que registran índices más altos de participación que en perío-

Número de Conflictos por Sujeto del Conflicto

SUJETO	Frecuencia	Porcentaje
CAMARAS DE LA PRODUCCION	11	3.80%
CAMPESINOS	8	2.80%
EMPRESAS	12	4.10%
ESTUDIANTES	14	4.80%
FUERZAS ARMADAS	1	0.30%
GREMIOS	22	7.60%
GRUPOS HETEROGENEOS	12	4.10%
GRUPOS LOCALES	17	5.90%
INDIGENAS	10	3.40%
ORGANIZACIONES BARRIALES	20	6.90%
PARTIDOS POLITICOS	44	15.30%
POLICIA	3	1.00%
SINDICATOS	44	15.20%
TRABAJADORES	72	24.80%
Total	290	100.00%

dos pasados, es una señal poderosa de una crisis política que convierte todo lo que toca en conflicto, disenso, bloqueo y oposición contumaz.

La reactivación de las actuaciones políticas de determinados actores puede ser visualizada de manera evidente en el género de los conflictos: tanto aquellos que corresponden al ámbito de lo laboral público como los referidos a la cuestión laboral privada registran -en conjunto- un notorio crecimiento, bordean el 55% del total de conflictos registrados, con relación a los períodos anteriores. A las paralizaciones y protestas de los sectores de la salud, de educación, de las municipalidades, se suman los interrumpidos llamados de atención por parte de los gremios empresariales y bancarios en torno a las medidas

económicas del régimen sobre todo en materia de su política tributaria.

Funcionarios del Estado con misiones diplomáticas en el exterior, médicos, enfermeras, maestros, empleados públicos y municipales, ven cada día como sus salarios -cuando llegan a tiempo- se vuelven cada vez más exiguos e inservibles. Todos ellos aparecen a la vez como víctimas y señales elocuentes del intenso desgaste del Estado-nación, de su incapacidad para equilibrar soluciones técnicas y arreglos políticos de largo alcance para crear mínimos márgenes de certeza, previsibilidad y movilidad a los actores sociales. Cada uno de nosotros hemos visto reducida a su mínima expresión la posibilidad de generar expectativas y planes de largo plazo, edificar un "plan de vida" en el cual

elaborar imágenes de un presente habitable y de un futuro no menos digno. Se necesitan mecanismos para reducir la complejidad y la incertidumbre de los sistemas económicos, sociales y políticos, sin embargo las instituciones creadas para esos fines -públicas y privadas- no han enrumbado sus actuaciones en función de estos objetivos, por el contrario, han producido altos niveles de incertidumbre y miedo, elementos que tal vez pueden ser vistos como las orientaciones de valor dominantes en el Ecuador de fin de siglo.

Nuevamente, a nivel del género de los conflictos ocurridos en el período marzo-junio, resulta pertinente llamar la atención sobre el corte regional que durante todo el gobierno demopopular ha adquirido la conflictividad social y política del país. Prácticamente 13% de la turbulencia social ocurrida ha sido protagonizada por movimientos cívico-regionales, si a ello se añaden las protestas ya mencionadas de los sectores productivos privados (asentados sobre todo en el litoral del país), tenemos un escenario de clivajes y divisiones regionales que han sido activadas, sobre todo, en negociaciones políticas o debates técnicos por las élites económicas (cámaras de la producción, y ciertos banqueros) y las élites políticas (sobre todo las vinculadas con el Partido Social Cristiano) guayaquileñas

como una estrategia de legitimación -sin incidencia en lo nacional- de una política opositora dramáticamente encerrada sobre sí misma.

Finalmente, "pugna de poderes" y conflictos "político-partidistas" y "político-legislativos" suman más del 15% del total de conflictos registrados. Ello evidencia, además de la repetidísima estrategia cortoplacista y electorera de los partidos -siempre es mejor negocio formar parte de la oposición que colaborar con el gobierno de turno-, la deplorable estrategia política que el presidente y su cercano círculo de asesores han puesto en juego a la hora de comunicar, defender y poner en circulación cada uno de sus proyectos de reforma política o económica. Se ha querido suplir con argumentaciones de corte tecnocrático las necesarias mesas, foros y demás mecanismos de interlocución y negociación políticas en el curso de las cuales los "otros" (opositores) conocen con anticipación los diferentes proyectos y eventualmente pasan a ser parte de las fórmulas de gobierno.

Los señalamientos anteriores cobran validez al apreciar las motivaciones que originaron los conflictos socio-políticos en el país. Así, el alto índice de 34% de los conflictos registrados obedecieron directamente a manifestaciones de disgusto e inconformidad con respecto a la gestión gubernamental (recordar

Número de Conflictos por Género del Conflicto

GÉNERO	Frecuencia	Porcentaje
CAMPESINO	8	2.80%
CIVICO REGIONAL	36	12.40%
INDIGENA	10	3.40%
LABORAL PRIVADO	39	13.40%
LABORAL PUBLICO	119	41.00%
POLITICO LEGISLATIVO	12	4.20%
POLITICO PARTIDISTA	22	7.70%
PUGNA DE PODERES	10	3.40%
URBANO BARRIAL	34	11.70%
Total	290	100.00%

que en el cuatrimestre anterior este porcentaje se situaba en torno del 28%). Se trata de un indicador que da luces sobre la forma en que el gobierno ha ido minando sus posibilidades de construir "adeptos", generar actores políticos que coadyuven y sean partícipes de sus líneas de reforma y direccionamiento del país. Las disputas al interior del partido gobernante (entre el vicepresidente y la ministra de finanzas por ejemplo) son señales claras de una conducción política excesivamente centrada en el presidente y su círculo cercano y que por tanto no permite ampliar el debate y el

consenso necesarios para legitimar las medidas adoptadas.

Lo anterior y la no recuperación del presupuesto del Estado (asunto que habla mal del impuesto del 1% a la circulación de capitales) habrían causado que casi 25% de los conflictos registrados sean originados por un deficiente manejo de la cuestión salarial en el país. Las recurrentes paralizaciones de los sectores de la salud y la educación, sobre todo, en miras a denunciar el incumplimiento en el pago de sus haberes por parte de la administración central y el índice de conflictos originados por problemas de financia-

Número de Conflictos por Objeto del Conflicto

OBJETO	Frecuencia	Porcentaje
DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN	39	13.40%
FINANCIAMIENTO	45	15.60%
LABORALES	7	2.40%
OTROS	28	9.70%
RECHAZO POLITICA ESTATAL	99	34.10%
SALARIALES	72	24.80%
Total	290	100.00%

miento (deudas a municipios, empresas públicas, seguro social, etc.) dicen bastante sobre los perversos efectos que el déficit fiscal tienen en la integración y el equilibrio social del país.

Como ya lo mencionamos, la conflictividad social del Ecuador ha adquirido un marcado tono regionalista, en el que las oposiciones Sierra-Costa, Quito-Guayaquil, centralismo-descentralización han marcado las directrices de gran parte del debate político relativo a la gestión del gobierno de Mahuad. En este sentido no sorprende que se ratifique una tendencia que viene madurando desde los tiempos en que el Fenómeno del Niño dejó destrozada gran parte de la región litoral del país: hablamos de la constatación de que la Costa aparece nuevamente como la principal fuente de conflicto y tensión social y política en el país (casi el 50% del total de conflictos registrados).

Claramente, los dardos confrontacionistas le llegan al gobierno central desde las provincias de la Costa ecuatoriana, son éstas las que en mayor medida expresan su abier-

to disgusto contra los perversos efectos de un manejo centralizado y homogenizador de la política, la cultura y la sociedad. Sin embargo, cabe resaltar que el hecho de que la provincia de Guayas aparezca como la principal productora de conflictividad (37%) sugiere que el marcado tono regionalista del debate político está atravesado por una disputa -electoral y simbólica- entre el Partido Social Cristiano, cuyas bases se concentran casi exclusivamente en el Guayas, y el partido Gobernante. La cuestión regional ha sido activada, entonces, con miras a medir, afirmar y legitimar la co-relación de fuerzas políticas en las diversas sociedades locales del país.

Cabe señalar, además, que la región andina presenta un cierto margen de crecimiento anterior como escenario de conflictividad social en el país con respecto al período (alcanza un 45%): si se piensa que las bases políticas y electorales del actual gobierno han estado asentadas sobre todo en esta región del país, puede concluirse que la legitimidad y el apoyo al régimen dismi-

Número de Conflictos por Regiones

REGION	Frecuencia	Porcentaje
AMAZONIA	16	5.52
COSTA	142	48.97
INSULAR	2	0.69
SIERRA	130	44.83
Total	290	100.00

nuyen de forma acelerada a medida que avanza el período gubernamental de la Democracia Popular. El deterioro exacerbado y violento de los últimos meses deja ver que el margen de maniobra política del gobierno es cada vez más restringido.

Por último resulta necesario llamar la atención sobre el crecimiento de los conflictos sociales cuyo escenario ha sido la provincia del Azuay: si en el período anterior apenas un 2% de la turbulencia social registrada en el país tuvo como lugar de eclosión a tal provincia, en el presente cuatrimestre su participación alcanza prácticamente el 7%.

En otro aspecto, en lo que se refiere a la intensidad del conflicto - asunto que expresa las modalidades de visibilización de las demandas y

presiones de los diversos actores sociales- se puede constatar un importante aumento de acciones concretas, del tipo huelgas, marchas y bloqueos, como principal forma de expresar el descontento social: suman, en conjunto, más del 46% del total de conflictos observados. Parecería ser que, al contrario del período anterior, los mecanismos dialógicos entre el gobierno y los diversos sujetos sociales en confrontación con aquel se han reducido drásticamente, por lo que tan sólo el 19% de los conflictos registrados han permanecido en su estado latente (amenazas).

A pesar de lo anterior, los datos recogidos no dan muestra de un aumento en los índices de detenciones y desalojos -más bien han disminui-

Número de Conflictos por Provincias

LUGAR	Frecuencia	Porcentaje
AZUAY	20	6.90%
CAÑAR	3	1.00%
CHIMBORAZO	4	1.40%
CÓTOPAXI	4	1.40%
EL ORO	8	2.80%
ESMERALDAS	9	3.10%
GALAPAGOS	2	0.70%
GUAYAS	108	37.20%
IMBABURA	2	0.70%
LOJA	2	0.70%
LOS RIOS	6	2.10%
MANABI	11	3.80%
MORONA SANTIAGO	1	0.30%
NAPO	3	1.00%
ORELLANA	3	1.00%
PASTAZA	4	1.40%
PICHINCHA	89	30.70%
SUCUMBIOS	2	0.70%
TUNGURAHUA	6	2.10%
ZAMORA CHINCHIPE	3	1.00%
Total	290	100.00%

Número de Conflictos por Intensidad del Conflicto

INTENSIDAD	Frecuencia	Porcentaje
AMENAZAS	55	19.00%
BLOQUEOS	17	5.90%
DESALOJOS	6	2.10%
DETENCIONES	6	2.10%
ESTADO DE EMERGENCIA	2	0.60%
HERIDOS / MUERTOS	6	2.10%
INVASIONES	1	0.30%
JUICIOS	15	5.20%
MARCHAS	52	17.90%
PAROS / HUELGAS	65	22.40%
PROTESTAS	33	11.40%
SUSPENSION	23	7.90%
TOMAS	9	3.10%
Total	290	100.00%

do con respecto al período anterior por lo que cabe suponer que no se ha "sobre-militarizado" el conflicto social. En este rubro se evidencia un manejo atinado, por decir lo menos, de parte de las autoridades centrales en la gestión de los conflictos políticos.

En lo que se refiere a las modalidades de procesamiento de los conflictos sociales en el período marzo-junio, y a las instancias estatales que se han hecho cargo de su manejo, se puede observar la consolidación de una tendencia "negociadora" entre las partes dirimientes. Así, prácticamente el 50% de los conflictos ocurridos han sido administrados por los mecanismos dialógicos fijados para el efecto y además han tenido un desenlace favorable. Como ya se mencionó, los índices de represión continúan a la

baja (6%), aunque no se trate todavía de un indicador que tranquilice y permita avisar mejores tiempos para el respeto de los derechos humanos en el país.

Llama la atención, sin embargo, que aumente el índice de conflictos cuya resolución se posterga o de plano queda "archivada" políticamente. La disolución de los conflictos sociales por la vía del olvido o la omisión constituye una fuente de preocupación adicional en referencia a las formas en que desde el poder central se reconocen y legitiman las reivindicaciones e identidades de los actores sociales en conflicto. Resulta peligroso que la turbulencia social sea procesada por la vía del desconocimiento de las interpelaciones de los "otros" y que por tanto queden en una suerte de "nebulosa", una constelación localizada

Número de Conflictos por Desenlace del Conflicto

DESENLACE	Frecuencia	Porcentaje
APLAZAMIENTO RESOLUCION	96	33.10%
NEGOCIACION	99	34.10%
NO RESOLUCION	33	11.40%
POSITIVO	44	15.20%
REPRESION	18	6.20%
Total	290	100.00%

por fuera de lo político-institucional que evidencia los escasos niveles de ciudadanía presentes en el país.

En lo que concierne al nivel institucional del gobierno que se encarga de administrar y resolver los conflictos sociales que ocurren en el país, cabe mencionar tres aspectos: a) el presidente ha tenido un perfil bajo en el manejo de la agitación social que ha vivido el país en los últimos meses; su incidencia alcanza apenas al 14% de los conflictos ocurridos (en el período anterior este índice alcanzaba el 19%); b) lo anterior se complementa con el hecho de que los diversos ministerios han debido activar en mayor medi-

da su presencia en la mediación de conflictos sociales (pasan del 9% en cuatrimestre noviembre-febrero al 22% en el período actual); se puede hablar entonces de un cierto principio de delegación de funciones al interior del poder ejecutivo; c) parecería ser que el manejo de los conflictos en el intervalo analizado se ha desplazado a los poderes locales y provinciales (entre las dos instancias suman casi 13%); si a ello se añade que la mediación del poder legislativo -en la que los diputados provinciales tendrían una importante incidencia- sigue siendo alta (11%), tenemos un escenario de desconcentración política, al menos en la mediación de conflictos socia-

Número de Conflictos por Intervención estatal

INTERVENCION	Frecuencia	Porcentaje
GOBIERNO PROVINCIAL	17	5.90%
JUDICIAL	16	5.50%
LEGISLATIVO	30	10.40%
MILITARES / POLICIA	5	1.70%
MINISTROS	65	22.40%
MUNICIPIO	20	6.90%
NO CORRESPONDE	70	24.10%
POLICIA	26	9.00%
PRESIDENTE	41	14.10%
Total	290	100.00%

les, de las tradicionales funciones y prerrogativas que la burocracia central ha adoptado. Se trata de un aspecto que podría explicar el amplio margen de conflictos negociados y de otros que se limitaron a la forma de amenazas.

En suma, el cuatrimestre marzo-junio pone en evidencia el escaso margen de maniobra política que ha conseguido el régimen de Mahuad a la hora de negociar su agenda de gobierno. Las estrategias de comunicación y concertación continúan siendo el gran déficit del gobierno demócrata cristiano. Esta carencia

de instrumentos políticos de deliberación y negociación sumado a una "sobre-regionalización" del conflicto político, gestada sobre todo desde la provincia del GUAYAS, permiten prever que el escenario futuro estará atravesado por un tono beligerante y poco constructivo en las relaciones entre el PSC y la DP. Los partidos denominados de centro-izquierda pasarán de esta forma a jugar un papel clave en el manejo de la política y la economía nacionales.

Distribución de conflictos por sujeto del conflicto y género del conflicto
Período: Marzo - Junio 1999

SUJETO DEL CONFLICTO	GENERO DEL CONFLICTO																				TOTAL	
	CAMPELINO		INDIGENA		CIV. REGIONAL		URB. BARRIAL		LABORAL PUBL.		LABORAL PRIV.		POLIT. PARTID.		POLIT. LEGISL.		PUGNA PODERES					
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
CAMARAS DE LA PRODUCCION	0	0.0	0	0.0	7	19.4	0	0.0	0	0.0	4	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.8
CAMPESINOS	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.8
EMPRESAS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5	9	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	4.1
ESTUDIANTES	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	41.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.8
FUERZAS ARMADAS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
PREMIOS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	56.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	7.6
GRUPOS HETEROGENEOS	0	0.0	0	0.0	12	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	4.1
GRUPOS LOCALES	0	0.0	0	0.0	17	47.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	5.9
INDIGENAS	0	0.0	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	3.4
ORGANIZACIONES BARRIALES	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	58.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	6.9
PARTIDOS POLITICOS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	100.0	12	100.0	10	100.0	44	15.2		
POLICIA	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0		
SINDICATOS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	37.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	15.2		
TRABAJADORES	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	68	57.1	4	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	72	24.8		
TOTAL	8	100.0	10	100.0	36	100.0	34	100.0	119	100.0	39	100.0	22	100.0	12	100.0	10	100.0	290	100.0		

Distribución de conflictos por intensidad del conflicto y género del conflicto
Período: Marzo - Junio 1999

SUJETO DEL CONFLICTO	GENERO DEL CONFLICTO																				TOTAL
	CAMPELINO		INDIGENA		CIV. REGIONAL		URB. BARRIAL		LABORAL PUBL.		LABORAL PRIV.		POLIT. PARTID.		POLIT. LEGISL.		PUGNA PODERES				
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
AMENAZAS	1	12.5	0	0.0	6	16.7	1	2.9	15	12.6	8	20.5	6	27.3	8	66.7	10	100.0	35	19.0	
BLOQUEOS	2	25.0	4	40.0	2	5.6	3	8.8	3	2.5	3	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	5.9	
DESALOJOS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	14.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.1	
DETENCIONES	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	2.6	1	3.6	0	0.0	0	0.0	6	2.1	
ESTADO DE EMERGENCIA	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	
HERIDOS/MUERTOS	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	5.9	0	0.0	0	0.0	3	3.6	0	0.0	0	0.0	6	2.1	
INVASIONES	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	
JUICIOS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.4	2	5.1	7	31.8	2	16.7	0	0.0	15	5.2	
MARCHAS	3	37.5	1	10.0	15	41.7	11	32.4	17	14.3	3	7.7	2	9.1	0	0.0	0	0.0	52	17.9	
PAROS/HUELGAS	1	12.5	4	40.0	5	13.9	0	0.0	47	39.5	8	20.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	22.4	
PROTESTAS	1	12.5	0	0.0	3	13.9	9	26.5	14	11.8	4	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	11.4	
SUSPENSION	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	10.9	8	20.5	0	0.0	2	16.7	0	0.0	23	7.9	
TOMAS	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	5.9	3	2.5	2	5.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	9	3.1	
TOTAL	8	100.0	10	100.0	36	100.0	34	100.0	119	100.0	39	100.0	22	100.0	12	100.0	10	100.0	290	100.0	

Distribución de conflictos por intervención estatal y género del conflicto
Período: Marzo - Junio 1999

SUJETO DEL CONFLICTO	GENERO DEL CONFLICTO																		TOTAL			
	CAMPELINO		INDIGENA		CIV. REGIONAL		URB. BARRIAL		LABORAL PUBL.		LABORAL PRIV.		POLIT. PARTID.		POLIT. LEGISL.		PUGNA PODERES					
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
GOBIERNO PROVINCIAL	1	12,5	1	10,0	5	13,9	2	5,9	7	5,9	0	0,0	1	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	5,9
JUDICIAL	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	4,2	2	5,1	9	40,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	5,5
LEGISLATIVO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	3,4	2	5,1	4	18,2	12	100,0	8	80,0	30	10,3		
MILITARES/POLICIA	0	0,0	4	40,0	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	1,7
MINISTROS	0	12,5	0	0,0	2	5,6	4	11,8	45	37,8	13	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	65	22,4
MUNICIPIO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	23,5	9	7,6	2	5,1	1	4,5	0	0,0	0	0,0	20	6,9		
NO CORRESPONDE	4	50,0	1	10,0	10	27,8	10	29,4	30	25,2	12	30,8	3	13,6	0	0,0	0	0,0	70	24,1		
POLICIA	1	12,5	1	10,0	5	13,9	9	26,5	6	5,0	1	2,6	3	13,6	0	0,0	0	0,0	26	9,0		
PRESIDENTE	1	12,5	3	30,0	13	36,1	1	2,9	13	10,9	7	17,9	1	4,5	0	0,0	2	20,0	41	14,1		
TOTAL	8	100,0	10	100,0	36	100,0	34	100,0	119	100,0	39	100,0	22	100,0	12	100,0	10	100,0	290	100,0		

Distribución de conflictos por desenlace del conflicto y género del conflicto
Período: Marzo - Junio 1999

SUJETO DEL CONFLICTO	GENERO DEL CONFLICTO																		TOTAL			
	CAMPELINO		INDIGENA		CIV. REGIONAL		URB. BARRIAL		LABORAL PUBL.		LABORAL PRIV.		POLIT. PARTID.		POLIT. LEGISL.		PUGNA PODERES					
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
APLAZAMIENTO RESOLUCION	5	62,5	2	20,0	18	50,0	15	44,1	46	38,7	8	20,5	2	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	96	33,1
NEGOCIACION	1	12,5	0	0,0	3	8,3	1	2,9	40	33,6	20	51,3	15	68,2	9	75,0	10	100,0	99	34,1		
NO RESOLUCION	1	12,5	2	20,0	9	25,0	6	17,6	4	3,4	6	15,4	5	22,7	0	0,0	0	0,0	33	11,4		
POSITIVO	0	0,0	3	30,0	1	2,8	5	14,7	27	22,7	5	12,8	0	0,0	3	25,0	0	0,0	44	15,2		
REPRESION	1	12,5	3	30,0	5	13,9	7	20,6	2	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	6,2		
TOTAL	8	100,0	10	100,0	36	100,0	34	100,0	119	100,0	39	100,0	22	100,0	12	100,0	10	100,0	290	100,0		

Distribución de conflictos por objeto del conflicto y género del conflicto
Período: Marzo - Junio 1999

SUJETO DEL CONFLICTO	GENERO DEL CONFLICTO																		TOTAL			
	CAMPELINO		INDIGENA		CIV. REGIONAL		URB. BARRIAL		LABORAL PUBL.		LABORAL PRIV.		POLIT. PARTID.		POLIT. LEGISL.		PUGNA PODERES					
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
DENUNCIAS DE CORRUPCION	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,8	7	5,9	10	25,6	16	72,7	3	25,0	0	0,0	0	0,0	39	13,4
FINANCIAMIENTO	5	62,5	1	10,0	5	13,9	11	32,4	14	11,8	7	17,9	1	4,5	1	8,3	0	0,0	45	15,5		
LABORALES	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	5,0	1	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	2,4		
OTROS	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	29,4	5	4,2	8	20,5	2	9,1	2	16,7	1	10,0	28	9,7		
RECHAZO POLITICA ESTATAL	3	37,5	9	90,0	31	86,1	9	26,3	17	14,3	12	30,8	3	13,6	6	50,0	9	90,0	99	34,1		
SALARIALES	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9	70	58,8	1	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	72	24,8		
TOTAL	8	100,0	10	100,0	36	100,0	34	100,0	119	100,0	39	100,0	22	100,0	12	100,0	10	100,0	290	100,0		